

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por el C. Lic. Andres Zedillo, contra el Tesorero Municipal de Cuernavaca, por violacion de las garantias que otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitucion Federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Andres Zedillo en representacion de la testamentaria del C. Antonio Zedillo, con fecha 25 de Noviembre presentó escrito á este Juzgado diciendo: que la expresada testamentaria, es dueña de un terreno situado en el portal de oriente de la plaza del mercado, por el que paga dos pesos mensuales al Ayuntamiento de esta Capital, como rédito de su precio que se reconoce á censo sobre el mismo terreno, conforme á la ley de 25 de Junio de 1856; que durante algun tiempo no pudo pagarse con puntualidad ese rédito, y en el año de 1871, el Síndico del Ayuntamiento, competentemente autorizado, convino con D. Francisco Zedillo, legatario del terreno y cuartos edificadas sobre el, en que se pagaría el adeudo de censos en abonos de dos pesos mensuales, que debían entregarse á la vez que los réditos corrientes, con cuyo convenio dió cuenta el mismo Síndico al Ayuntamiento, quien se sirvió aprobarlo; y en consecuencia, se recibieron los abonos como lo prueban dos recibos adjuntos de la Tesorería Municipal, por cuatro pesos cada uno, estendidos en los meses de Setiembre y Noviembre de 1872; pero que atacando los derechos adquiridos por la testamentaria en virtud de ese pacto, el Tesorero Municipal, atribuyéndose facultades que no le competen, procedió á embargar los cuartos en virtud de la facultad economico-coactiva, sin requerir previamente de pago, sin practicar el em-

bargo con persona legítima, sin notificarlo; y posteriormente sesguó ese procedimiento, hasta rematar los referidos cuartos, sin citar para el nombramiento de perito, ni para las almonedas y remate á la testamentaria, ni á D. Francisco Zedillo con quien antes se habia entendido la Tesorería Municipal; y que como ese procedimiento viola las garantias que otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitucion de la República, pedia, que suspendiéndose desde luego el otorgamiento de la escritura de adjudicacion, al postor D. José Deheza, se amparase á la testamentaria en el goce de las garantias violadas.

Se decretó la suspension solicitada, conforme á la segunda parte del artículo 59 de la ley de 20 de Enero de 1869; y pidiendo el informe con justificacion prevenido por el artículo 99 de la misma ley, el Tesorero Municipal, con fecha 28 del mismo Noviembre, informó diciendo: que segun las constancias que obran en aquella oficina, Don Francisco Zedillo es dueño de dos cuartos edificadas en unos terrenos del Ayuntamiento, que fueron adjudicados al *causante Zedillo*, conforme á la ley de 25 de Junio de 1856; que por algun tiempo dejó de pagarse el rédito resultante de esa adjudicacion, y D. Francisco Zedillo comenzó á pagarlo en pequeños abonos mensuales, y suspendidos estos, la Tesorería notificó de pago; y no verificado este, practicó el embargo entendiéndose la diligencia con Don Agustin Zedillo, hijo de Don Francisco, y procedió despues al valúo, almonedas y remate de los cuartos.

El C. Tesorero entra en varias consideraciones que despues examinaremos, y por vía de justificacion, adjunta copia del expediente formado por la misma Tesorería, á consecuencia de la cobranza economico-coactiva contra Zedillo, y de ella aparece: que en 12 de Setiembre próximo pasado, el Tesorero Municipal mandó embargar al C. Francisco Zedillo por ciento ochenta y siete pesos treinta y siete centa-

vos, réditos del terreno que posee á censo *no adjudicado*, por no haber cumplido con la notificación de pago que se dice fué oportunamente librada; que el embargo se entendió con el C. Agustín Zedillo; que se trabó ejecución en cuatro cuartos de la propiedad del deudor, sitos en la plaza principal; y después se levantó el embargo de dos de esos cuartos, por bastar los otros dos para cubrir el adeudo; y estos se mandaron valuar al C. Marino Sanchez, que los justipreció en quinientos setenta y un pesos cinco centavos; que en 18 del mismo Setiembre se mandaron pregonar los cuartos embargados, citando para las almonedas los días 19 y 29 del mismo y 9 del siguiente Octubre, no habiendo postores en la primera; según una rectificación posterior se fijaron para esas almonedas los días 27 de Setiembre, 8 y 18 de Octubre, se mandaron publicar los pregones, y no habiéndose presentado postores, se mandaron también retazar los cuartos nombrando al C. Tesorero nuevo perito al efecto, al C. Luis Vega y Navarrija, quien redujo su precio á quinientos pesos ceintidos ventavos, y se señalaron para las nuevas almonedas los días 29 de Octubre, 9 y 18 de Noviembre, rematándose por último esos cuartos en favor de D. José Deheza por cantidad de trescientos treinta y tres pesos treinta y ocho centavos. Del mismo expediente aparece: que con fecha 6 de Agosto se libró mandamiento de pago al Sr. Zedillo D. Francisco, y no hay constancia de que en todo el curso del procedimiento coactivo se le haya citado una sola vez.

En el informe se señalan como fundamentos de la queja y petición de amparo, los siguientes; primero: la existencia de un pacto entre el Ayuntamiento y el Sr. Zedillo, que se infringió con la cobranza del adeudo total; segundo: que la Tesorería Municipal, al poner en ejercicio el procedimiento coactivo, se ha atribuido facultades que no le pertenecen; tercero: que no se hicieron saber al quejoso los procedimientos prelimina-

res al remate; y cuarto: que se impidió al quejoso el recurso ante los tribunales.

Analizando el primer fundamento, el Tesorero Municipal dice: que no es cierto que hubiera contrato alguno entre el Ayuntamiento y el deudor que obligara á aquel á conformarse con abonos de dos pesos mensuales, y solo por consideración se estuvieron admitiendo los abonos al Sr. Zedillo; pero que suponiendo su existencia, no pagados puntualmente esos abonos, el Ayuntamiento quedó en libertad para exigir el cumplimiento del contrato ó rescindirle, exigiendo el total de su crédito, y suponiendo todavía que el Ayuntamiento faltó sin motivo á ese contrato, su falta de cumplimiento no sería materia de un juicio de amparo. El quejoso no ha presentado efectivamente hasta ahora, prueba alguna de la existencia de ese convenio, ni consta que por el tuviese la testamentaria un derecho adquirido para que no se le exigiese desde luego el monto total del adeudo; pero si realmente hubo tal contrato estableciendo una novación en los términos de la obligación de pago, no cumplido ese convenio por parte del quejoso, el Ayuntamiento solo podría exigir el pago de los abonos vencidos ó pedir judicialmente la rescisión conforme al artículo 1537 del Código civil vigente en el Estado desde 1871, y también conforme á la legislación anterior; y si bien la falta de cumplimiento de un contrato no podría ser materia de un juicio de amparo, si bastaría para fundarlo, en concepto del que suscribe, el hecho de que una autoridad administrativa declarase la nulidad ó rescisión de un contrato, invadiendo las atribuciones exclusivamente propias de los tribunales y extralimitando sus facultades.

Como única contestación al que se considera segundo fundamento de la queja, el C. Tesorero presenta un ejemplar del decreto del Estado, número 85, de 10 de Junio último, que concede á los Ayuntamientos el ejercicio de la facultad económico-coactiva en los términos de la ley de 20 de Noviembre de 1888, para el cobro de sus créditos

por medio de sus tesoreros y síndicos. Sobre este punto, el informe habria sido mas eficaz, comprendiendo estas dos cuestiones; si el Tesorero Municipal de propia autoridad y sin acuerdo previo del Ayuntamiento, puede cobrar los créditos del Municipio, y si puede por sí solo seguir el procedimiento coactivo, sin estar acompañado del Síndico.

El quejoso ademas, dice que el Tesorero Municipal se atribuyó facultades que no le competen, declarando nulo el convenio, y en ese concepto, aun admitiendo que por sí solo pudiese legítimamente usar de la facultad económico-coactiva, es indudable que no está en sus atribuciones decidir sobre la subsistencia ó validez de los contratos celebrados por el Ayuntamiento; ni aplicar la facultad coactiva á otros adeudos que los indudables, y cuya cobranza no requiera previa declaracion judicial.

Respecto de la falta de notificacion al deudor, de los procedimientos anteriores al remate, se asienta el informe, que por los padrones del Ayuntamiento consta que el dueño de los cuartos embargados es Don Francisco Zedillo; que este Sr. ha estado pagando los réditos y por eso se entendió con él la cobranza; que en su ausencia, el embargo se entendió con su hijo; y que todavia el dia 10 de Noviembre, el mismo D. Francisco presentó al Ayuntamiento un recurso que encopia se acompaña, en que se dice dueño de los cuartos y pedia que se suspendiera la ejecucion, por que ni estaba obligado á pagar en junto lo que adeudaba, ni estaba tampoco conforme con la liquidacion practicada por la Tesorería.

En el escrito de queja, se asegura que los cuartos referidos pertenecen á la testamentaria de D. Antonio Zedillo; y como ni las constancias de los padrones del Ayuntamiento bastarían á justificar que sean de D. Francisco, ni tampoco las gestiones de este Sr. pues está interesado en la conservacion de esos cuartos como legatario de ellos, queda por esclarecer ese punto. Pero se queja el Lic. Andres Zedillo, de que ni los re-

presentantes de la testamentaria, ni D. Francisco Zedillo, fueron requeridos de pago con anterioridad al embargo, ni despues fueron citados para el nombramiento de peritos, ni para las almonedas, y solo por aviso privado tuvieron noticia del remate.

Respecto del último punto, el quejoso no dice que se le hayan cerrado las puertas de los tribunales, sino que se viola la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion, cuando se impide el juicio de los tribunales ó se usurpan sus facultades en los negocios que son de su resorte; y en el caso de que nos ocupamos, el Tesorero se ha ingerido en un asunto contencioso, como es el de la subsistencia ó rescision del convenio celebrado con el Ayuntamiento.

Hé seguido en su análisis y consideraciones á la autoridad informante, para demostrar que las razones que aduce, no serian bastantes para denegar desde luego el amparo; pero á mi juicio, es indispensable esclarecer los hechos en que se funda la queja, para que pueda decidirse, si con el procedimiento reclamado se violaron ó no las garantías invocadas. En efecto, es necesario se compruebe si los cuartos embargados son ó no propiedad de la testamentaria de D. Antonio Zedillo; pues en el caso de que como asienta el C. Tesorero, pertenezcan á D. Francisco Zedillo, tendria que denegarse el amparo; pues conforme al artículo 102 de la Constitucion, solo puede seguirse este recurso á petición de la parte agraviada, y debe justificar tambien, si hubo convenio que obligara al Ayuntamiento á recibir los abonos, y los términos en que ese convenio se haya celebrado.

Por lo que no pudiendo desecharse el recurso desde luego, el Promotor pide: que con arreglo al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869, se mande recibir este negocio á prueba, por un término comun que no exceda de ocho dias.

Cuernavaca, Diciembre 6 de 1873.

Otro si digo: que por haber ocurrido á la vez varios negocios de que se corrió trasla-

Suprema Corte de Justicia de México

do al que suscribe, no pudo despachar este negocio hasta la fecha.—*N. Medina.*

Segundo pedimento fiscal.

Ó. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el recurso de amparo seguido por el albacea de la testamentaria de Don Antonio Zedillo, contra el procedimiento de la Tesorería Municipal, en virtud del cual se embargaron y remataron dos cuartos que aquella posee en la plaza del mercado de esta capital, su estado su puesto, dice: que la justificación de V. se ha de servir declarar: que la Justicia de la Unión ampara y protege á la expresada testamentaria, contra el procedimiento reclamado, pues así procede legalmente, según consta de los fundamentos legales, que paso á exponer:

Por el documento auténtico presentado por el quejoso, durante el término de prueba, está plenamente probado que el C. Lic. Andres Zedillo es albacea de la testamentaria de D. Antonio del mismo apellido; que esa testamentaria está pendiente aun; que entre sus bienes estan inventariados los cuartos que embargó el Tesorero Municipal, y que estos no se han entregado aun al legatario. Consta ademas por los recibos que se adjuntaron al escrito de queja, que el terreno en que estan ubicados esos cuartos, fué adjudicado á D. Antonio Zedillo, y está destruida por consiguiente la aseveración de la autoridad ejecutora; que refiriéndose á los padrones del Ayuntamiento, considera á D. Francisco Zedillo poseedor ó propietario de esos cuartos. Por las declaraciones contestes de los CC. Eleuterio Aramburu y Fernando Ramirez, testigos presentados por el quejoso, y que fueron, el primero regidor y el segundo tesorero del Ayuntamiento que funcionó del 16 de Setiembre de 1871 á igual fecha de 1872, á las que se agrega la declaracion conforme tambien del C. Francisco Zedillo, testigo

tachable por el interes que tiene en este negocio; está igualmente probado, que el Ayuntamiento aprobó un convenio celebrado por su síndico, en virtud del que debía pagarse el adeudo por censos de los terrenos que ocupan los cuartos, en abonos de dos pesos que debian entregarse al pagar los censos corrientes, como de facto los estuvo entregando por algun tiempo el C. Francisco Zedillo. Por último: de la copia del expediente formado por la Tesorería Municipal y que se adjuntó al informe, consta que el procedimiento económico-coactivo se entendió con este Sr. y no con la testamentaria; que en él intervino solo el C. Tesorero, y no aparece acuerdo previo de la Corporacion, para que se procediera á la cobranza.

Esclarecidos así los hechos, el procedimiento reclamado es en mi concepto ilegal y viola las garantías individuales invocadas por el quejoso. Inovada la obligacion del causante, por el convenio aprobado por el Ayuntamiento, no podia cobrarse el crédito total, sin previa rescision de ese convenio, y es obvio que la Corporacion solo tenia derecho para pedir judicialmente la rescision; pero decidiéndola por sí misma, se ingirió en un asunto contencioso, usurpando las atribuciones de los tribunales. El derecho para cobrar el adeudo total, no era claro é indudable; y por consiguiente, tampoco procedía el uso de la facultad económico coactiva. Ademas, esa facultad está concedida á los Ayuntamientos, para que la ejerzan por medio de sus Tesoreros y Síndicos, como este Juzgado ha tenido oportunidad de verlo con motivo del amparo que siguió D. Ambrosio F. Osante contra el Ayuntamiento de esta Capital; reunidos el Síndico y Tesorero, han puesto en práctica el procedimiento coactivo, entendiendo como en mi concepto debia ser, que la ley no dá al segundo otro carácter que el de mero administrador ó ejecutor en los intereses de la Corporacion, y es el segundo quien tiene el carácter de su representante. El artículo 14 de la Constitucion de la República establece, que na-

die puede ser juzgado ni sentenciado sino por el tribunal que previamente haya establecido la ley; y es inconcuso que se ha violado esa garantía, pues importaba un juicio la resolución de los derechos adquiridos por la testamentaria, en virtud del convenio, y solo una sentencia judicial podía declarar la rescisión; por lo que prevaleciéndose de su autoridad el Ayuntamiento, usurpó las atribuciones de los tribunales. El artículo 16 del mismo Código, previene: que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino por la autoridad competente en virtud de causa legal; y el Ayuntamiento no era competente para rescindir por sí mismo el convenio; tampoco lo es el Tesorero para cobrar sin previo acuerdo de la Corporación el crédito total, y la facultad coactiva solo pueden ejercerla los Síndicos en compañía de los Tesoreros de los Ayuntamientos, conforme al decreto del Estado de 10 de Junio próximo pasado. Por último el artículo 17 de la misma suprema ley, prohíbe que se ejerza violencia para reclamar un derecho, y es incuestionable violencia que se haya ejecutado á la testamentaria de D. Antonio Zedillo, y se vendan sus bienes, sin que se le haya requerido previamente de pago, y sin que despues se le haya hecho saber siquiera el procedimiento. Y procediendo el amparo, siempre que por los actos de cualquiera autoridad se violen las garantías individuales, el Promotor pide: que con arreglo á los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declare en los términos del principio.

Cuernavaca, Diciembre 31 de 1873.

Otro sí digo: que suplico al Juzgado se sirva recibir este alegato, no obstante que hoy mismo se ha citado para sentencia, por no haber podido presentarlo con anterioridad; pues como le consta, he tenido un grande recargo en mi despacho.—Fecha ut supra.—*N. Medina.*

Son copias que certifico. Cuernavaca, Enero 16 de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Enero 7 de 1874.—Visto este juicio promovido por el Lic. D. Andres Zedillo, por sí y á nombre de sus co-albaceas D^a Manuela Zedillo y D. Ramon Portillo y Gomez, pidiendo amparo contra el C. Tesorero Municipal, por decir que este funcionario ha violado á la Testamentaria que representan, las garantías que otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitución federal, con el embargo y remate de dos cuartos fabricados en el Portal de Oriente de la plaza de esta Ciudad, en terreno perteneciente al Ayuntamiento de la misma; cuyos cuartos forman el legado que el Testador D. Antonio Zedillo dejó en su testamento á su hermano D. Francisco del mismo apellido, á quien los albaceas aun no hacen entrega de dichos cuartos; y fundada la violación, en que el Síndico del Ayuntamiento habia convenido con D. Francisco Zedillo en recibir abonos de dos pesos mensuales para cubrir adeudos atrasados por el cánón de la localidad en que estan fabricados esos dos cuartos, y esto con anuencia tácita ó expresa de la Corporación Municipal; pues de hecho estuvo pagando D. Francisco Zedillo el cánón corriente y el atraso en los términos convenidos, como consta de dos recibos que acompañó á su ocursio uno de los albaceas, y otros que ofreció presentar; y que en ausencia del legatario, los cuartos fueron rematados en muy bajo precio, sin notificar de pago á los albaceas, ni practicar el embargo con persona legítima y sin citacion para el nombramiento del perito, avaluador, para las almonedas y el remate, con cuyo procedimiento fueron violadas las garantías de los artículos constitucionales citados, pues se ejerció violencia en el modo de cobrar y no se ocurrió á la autoridad judicial para la rescisión del convenio celebrado entre el Síndico y D. Francisco Zedillo. Visto el auto en que se mandó suspender el otorgamiento de la escritura á favor de la persona en quien fincó el remate;

lo informado por el C. Tesorero con los justificantes que acompaña; el pedimento del C. Promotor; las pruebas rendidas por los interesados y los alegatos del albacea y de este funcionario. Resultando: que D. Francisco Zedillo, en 10 de Noviembre último, ocurrió al Ayuntamiento gestionando á su nombre se suspendiese todo procedimiento en el asunto de dos cuartos que le habían embargado, mientras se liquidaba su legítimo adeudo en cuanto á censos, por no estar él conforme con la cantidad que se decía deber; y liquidada que fuese, se le recibiesen por la que resultara cinco pesos mensuales de abono hasta su saldo, sin perjuicio del pago corriente; y exponiendo que cuando él recibió los cuartos, los creyó libres de todo gravámen, por que desde su construcción en 1858, nunca se habían cobrado censos; pero que al cobrárselos la Tesorería Municipal, en 1871 no tuvo inconveniente en reconocer la deuda, ofreciendo pagarla en abonos de á dos pesos mensuales, juntos con lo corriente; en lo que dice estuvo anuente el representante de los intereses municipales; de cuyo escrito (transcrito á fojas 11 y 12) en que se llama dueño de los cuartos en cuestión, por que se los dejó en legado su hermano D. Antonio, se deduce que ya en 1871 se le había dado, ó él se había dado por recibido de la entrega y posesión de ellos, á ciencia y presencia de los albaceas; y como tal dueño era por esto reputado, cobrando en ese concepto el Tesorero los censos atrasados y corrientes, no á los albaceas de D. Antonio, sino al legatario D. Francisco Zedillo, quien reconoció la deuda y estipuló el modo de pagarla, y practicando como era natural esa Oficina en ausencia de este, en 13 de Setiembre de 73, la diligencia de embargo con su hijo Agustín, quien de seguro le avisaría, lo mismo que á los albaceas, los que no niegan se practicara tal diligencia, pues solo dice el escrito que se practicó con persona no legítima. Que en ese año de 1871 ni en Noviembre de 73 en que presentó el

escrito referido cuyo contenido y su proveído no es creíble lo ignorasen los albaceas, reclamaron, estos tales gestiones, ni ocurrieron ellos á Zedillo ante el Juez á deducir sus derechos, como se les indicaba en dicho proveído; que con inserción del acuerdo del Ayuntamiento, se comunicó á Zedillo en 14 ó 15 de Noviembre. Que esa omisión por su parte no dejó de perjudicarlos; pues aunque el Tesorero y Síndico por la suya tienen también la obligación de remitir al Juez las diligencias practicadas suspendiendo sus procedimientos, luego que nazca punto contencioso, según los artículos 3 de la ley de 20 de Noviembre de 1838 y 13 de la de 20 de Enero de 1837, vigente en toda la República, estos funcionarios se habían visto obligados á cumplir con tales deberes; si la parte de Zedillo ó de los albaceas, ocurriendo á la justicia, los hubiesen hecho comparecer ante ella para ventilar el punto contencioso como lo era en efecto, el de si el convenio de pagar en abonos estaba ó no rescindido.

Considerando sin embargo: que con el tránsito hasta el remate sin acudir al Juez, usó de violencia el Tesorero en el cobro del adeudo, pues privaba á la parte deudora de los medios de defensa que la ley le concede, con lo que le vulneró sus garantías; por lo que el agraviado tenía un derecho incuestionable á el amparo, que no Zedillo, sino uno de los albaceas ha solicitado, por decir que no se ha hecho al legatario la entrega del legado, cuando este confiesa haberla recibido, sin ser requisito legal que tal tradición sea precisamente judicial ó solemne, que por esto es dudoso que la testamentaria sea la agraviada, y casi no hay duda de que lo sea Zedillo, persona que no ha pedido el amparo.

Considerando: que el albacea presentado que dijo prestaba voz y caución *de-rato et grato* por sus co-albaceas ausentes, ni afirmó como debía tal caución (L. 10 tit. 5 part. 3, y Sala Tomo 5 pag. 10 núm. 10) ni ha hecho constar de manera alguna haberles

dado aviso de que habla el artículo 3693 del Código civil del Distrito, vigente en el Estado, por lo que no hay constancia de que dichos co-albaceas hayan aceptado la responsabilidad de este juicio.

Considerando: que tambien es dudoso si aun en el caso de que la testamentaria sea la perjudicada con el remate de los cuartos, se haya violado á los albaceas alguna garantía individual y no mas bien un derecho, cuyo remedio pueden procurar por otros medios legales; por todo lo expuesto se declara.

Primero: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al albacea Lic. D. Andres Zedillo, por no haberse violada en su persona, ni en la de sus co-albaceas, las garantías que otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitucion federal.

Segundo: no ha lugar á la multa que impone el artículo 16 de la ley citada de amparos, por no haberse obrado de malicia.

Tercero: notifiquese esta sentencia, de la que se sacaran las copias necesarias para su publicacion, reponiendo el Lic. Zedillo el papel que deba reponerse.

Cuarto: remítase con citacion este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando lo proveyó y firmó el C. Lic. Mariano Sansalvador, Juez interino de Distrito del Estado de Morelos. Doy fé.—*Mariano Sansalvador*.—Una rúbrica.—*José Anastasio Rego*, secretario.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Enero 16 de 1874.—*Mariano Sansalvador*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 31 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por el Lic. Andrés Zedillo como albacea de la testamentaria de Don Antonio Zedillo y á nombre de

TOMO V.—PARTE II.

sus co-albaceas Doña Manuela Zedillo y D. Ramon Portillo y Gomez contra el C. Tesorero municipal de Cuernavaca que para hacer efectivo el pago de los censos vencidos correspondientes al terreno propiedad del Ayuntamiento de esa Ciudad, situado en el portal de Oriente de la plaza del Mercado de la misma, mandó embargar y sacó á remate dos cuartos edificadas sobre este terreno, pertenecientes á la testamentaria que representa, sin ocurrir previamente á la autoridad judicial para la rescision del convenio celebrado por el Síndico del Ayuntamiento con D. Francisco Zedillo, legatario de los cuartos, sobre recibir avonos de dos pesos por los censos atrasados de la localidad en que estan situados, así como sin notificar de pago á los albaceas, ni practicar el embargo persona legítima, y sin citacion para las demas diligencias hasta rematarse las piezas; con cuyos procedimientos se han violado en sentir del quejoso las garantías consignadas en los artículos 14 y 27 de la Constitucion federal; y considerando:

Que si bien la Tesorería municipal de Cuernavaca ha podido en uso de la facultad económico-coactiva asegurar por medio del embargo el pago de los censos atrasados, esa facultad no se extendía, en caso de oposicion de parte legítima y de suscitarse un litigio, hasta autorizar á la misma oficina á proceder al remate de los cuartos, antes de recaer una resolucion judicial favorable á los intereses que representa.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal se decreta: que es de reformarse la sentencia pronunciado por el C. Juez de Distrito en 7 de Enero del presente año, que declaró no haber lugar al amparo federal en este recurso, y se resuelve:

1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Lic. Andrés Zedillo como albacea de la testamentaria de Don Antonio Zedillo contra el embargo de los dos cuartos situados en la plaza del Mercado de Cuernavaca, llevado á efecto por la Tesorería del

Ayuntamiento de la misma Ciudad.

2º La Justicia de la Union ampara y protege á la misma testamentaria contra los procedimientos del Tesorero municipal examinados á hacer efectivo el pago de la deuda por medio del remate de las piezas.

Devuélvanse los autos al Juzgado de origen con copia certificada de esta sentencia pública y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidentes y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*J. José de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 27 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz* oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida en el Juzgado de Distrito de Jalisco, contra Hermenegildo Mesa y Gregorio Briseño, por robo de correspondencia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: La noche del 28 de Marzo último, se llevaron Hermenegildo Mesa y Gregorio Briseño del patio de la Hacienda del Gruyo, la balija del correo que de Autlan y San Gabriel conducía Modesto Santillan. Habiéndoles alcanzado en el camino que llevaban con su carreta para el rancho del Zapotillo, fueron aprehendidos con la balija en cuestion, y al regresar al Grullo, aquella apareció en el suelo, por que se salió de la carreta en que ve-

nía, ó por que Meza la tiró de intento. Puestos los culpables á disposicion del Juez de 1ª instancia de Autlan, organizó el proceso, y de las diligencias que practicó resultaron justificados los hechos siguientes: que Meza confesó haber tomado la balija, creyéndola un pedazo de cuero insignificante, pero útil para sus usos de labranza; y que habiéndola examinado en el camino y viendo que tenía cadena, la creyó de importancia y se proponia devolverla al dueño de la Hacienda al dia siguiente; que Briseño hacia de mozo de Meza y vió á éste cuando colocó la balija en la carreta, creyéndola tambien un pedazo de cuero sin importancia; que la balija apareció descosida, alegando los procesados que esto sería ocasionado por los paños de la carreta; y que nada se perdió de la correspondencia, aunque no se sabe si estaba dentro de la balija cuando apareció descosida ó por otro conducto diferente llegó á la Administracion de correos de Autlan.

El Juez de 1ª instancia no solo llevó el proceso hasta citar para sentencia á los encausados, como pudo y debió hacerle en auxilio de la jurisdiccion federal, sino que pronunció sentencia sin ser competente, dando en su fallo por compurgado el hurto cometido al llevarse la balija, creyéndola un objeto indiferente, y absolviendo á los procesados por haberse llevado la correspondencia, por no haberse perdido ni violado esta, y por parecer que los encausados no trataron de robarla.

Al Promotor parece justa la resolucion del Juez de Autlan, atendiendo á las consideraciones en que se apoya; pero como es notoriamente nula por la falta de jurisdiccion en los jueces de Estado para fallar sobre negocios de la competencia federal, como el de que se trata;

Concluye pidiendo: que ese Juzgado de Distrito sentencie esta causa en los terminos que debidamente lo hizo el Juez de Autlan, citando previamente á los encausados en los terminos legales.